



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
UNIDAD DE INSPECCIONES DE POLICÍA  
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA DE CONOCIMIENTO EN ASUNTOS DE  
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
CARRERA 52 N° 71- 84 - CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE  
TELÉFONO: 3855555 EXT. 9770 - 9772**

<b>RADICADO:</b>	<b>02-11972-25</b>
<b>DIRECCION INMUEBLE:</b>	<b>CARRERA 40 B NUMERO 15 100 INT 807</b>
<b>INICIADOR:</b>	<b>CAMILA SALAZAR FRANCO</b>
<b>CONTRAVENCION:</b>	<b>VIOLACION LEY 820 DE 2003.</b>
<b>CONTRAVENTOR:</b>	<b>ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO.</b>

**RESOLUCION 295.**

Medellín, nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO  
SANCIONATORIO Y SE FORMULAN CARGOS**

Por medio de la cual la Inspección de Policía Urbana de conocimiento en Asuntos de Protección al Consumidor de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en uso de sus facultades legales; en especial las conferidas por la Ley 820 de 2003, y de conformidad con las funciones delegadas por el Alcalde de Medellín mediante Decreto 532 de 2016 y 888 de 2022, y en concordancia con la Ley 1437 de 2011, inicia procedimiento sancionatorio y formula cargos, con base en los siguientes,

**HECHOS:**

El día 4 de abril del 2025 la señora **CAMILA SALAZAR FRANCO**, identificada con cedula de ciudadanía N°1.152.212.380, interpone queja en contra las sociedades denominadas **ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS**, identificadas con NIT 901497927-3 y 901899412-8, representadas legalmente por el señor **GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ** y la señora **ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO** identificados con cedula número 1.040.755.413 y 21.394.822 respectivamente, por presunta violación a los lineamientos del artículo 34, numeral 1 de la Ley 820 de 2003, como se observa en los anexos de la queja,



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

PROPIETARIA entregó el inmueble anteriormente descrito a la sociedad **ARRIENDOS ANTIOQUIA S.A.S.** (en adelante, la **INMOBILIARIA**), identificada con NIT 901.497.927-3 y representada legalmente por el señor **GENE FERNANDO VISBALDE LAHOZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 1.040.755.413, para su administración. 3. La relación jurídica entre la **PROPIETARIA** y la **INMOBILIARIA** se formalizó mediante la suscripción de un Contrato de Administración de Inmueble en Arrendamiento (en adelante, el Contrato), respecto del bien inmueble referido en el numeral primero. 4. Las partes acordaron expresamente que la relación contractual derivada del Contrato de Administración se regiría por lo dispuesto en la Ley 820 de 2003, la cual regula el régimen especial de arrendamiento de vivienda urbana, siendo esa la norma aplicable para resolver cualquier situación relacionada con su ejecución, cumplimiento e interpretación. (...) 7. La **PROPIETARIA** ha tenido que requerir de manera constante a la **INMOBILIARIA** para que realice la consignación del canon de arrendamiento, toda vez que, durante la mayoría de los meses posteriores a la firma del CONTRATO, dicha obligación no ha sido cumplida en la fecha pactada contractualmente, lo que ha generado perjuicios económicos reiterados a la **PROPIETARIA**. 8. La **PROPIETARIA** ha solicitado en múltiples ocasiones y por medio del aplicativo WhatsApp el cobro del canon de arrendamiento, debido a que sus intentos de comunicación telefónica han sido infructuosos al ser constantemente rechazadas sus llamadas. Asimismo, ha requerido reiteradamente la programación de una cita presencial con el gerente o con el área jurídica de la **INMOBILIARIA**, sin que a la fecha se le haya otorgado respuesta o solución alguna. Tales solicitudes han tenido como finalidad conocer las causas de los reiterados retrasos en la consignación de los cánones, procurar una solución concertada, y acordar la terminación anticipada del CONTRATO, en razón del incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales a cargo del ADMINISTRADOR. 9. En el mes de enero de 2025, la **PROPIETARIA** se dirigió personalmente a las oficinas de la **INMOBILIARIA** ubicadas en el Edificio San Esteban, oficina 1404 con el fin de exigir el pago del canon de arrendamiento correspondiente, el cual no había sido consignado dentro del plazo pactado, generándole perjuicios económicos a mi poderdante. La visita presencial se realizó ante la falta de respuesta efectiva por parte de la **INMOBILIARIA** a través de los medios de comunicación habituales, como llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp, canales por los cuales no se le brindó explicación ni solución alguna respecto del incumplimiento. 10. En el mes de febrero de 2025, la **PROPIETARIA** advirtió, a través de la imagen de perfil de uno de los contactos de la **INMOBILIARIA** en la aplicación WhatsApp, que la sociedad aparentemente opera ahora bajo el nombre de "Luxor Living", hecho que nunca fue notificado formal ni oportunamente a la **PROPIETARIA** por parte de la sociedad. Esta situación genera preocupación respecto a la continuidad, identidad y obligaciones de la persona jurídica contratada. 11. Adicionalmente, uno de los familiares de la **PROPIETARIA**, quien también tiene bienes inmuebles entregados en administración a la **INMOBILIARIA**, recibió una consignación bancaria del canon de arrendamiento desde una cuenta registrada a nombre de "Luxor Living", lo que refuerza la presunción de un cambio no informado de razón social o de



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

situación que no fue comunicada en ningún momento a la PROPIETARIA, pese a la existencia de un contrato vigente. A la fecha, la sociedad no ha efectuado el pago del último canon de arrendamiento, el cual ya se encuentra vencido, lo que constituye un nuevo incumplimiento contractual y genera una afectación directa al patrimonio de la PROPIETARIA. 13. El día 27 de marzo de 2025, fecha en la que se cumplía el quinto (5°) día hábil para la consignación del canon de arrendamiento (plazo máximo establecido en el CONTRATO), la PROPIETARIA acudió nuevamente a la sede física de la INMOBILIARIA con el fin de exigir el pago correspondiente. No obstante, al llegar al lugar, el portero del edificio le informó que la sociedad había cerrado su punto de atención presencial y que a partir de ese momento operarían desde los domicilios de sus colaboradores. Asimismo, le fue exhibido un aviso impreso, indicándole que le tomara una fotografía, ya que esa era la única comunicación que la sociedad había dejado para los usuarios. Esta decisión de cierre y modificación en el canal de atención no fue previamente comunicada ni notificada a la PROPIETARIA, vulnerando los deberes de información, transparencia y buena fe contractual. 14. Desde la referida fecha, la PROPIETARIA ha intentado comunicarse de forma reiterada a los números de teléfono celular indicados en el aviso dejado por la INMOBILIARIA, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna ni explicación sobre el pago pendiente del canon de arrendamiento. Esta omisión ha ocasionado perjuicios económicos directos, al privarla del ingreso mensual que legal y contractualmente le corresponde, así como afectaciones de orden moral, pues la PROPIETARIA ha manifestado sentirse humillada e impotente ante la incertidumbre generada, el incumplimiento sistemático por parte de la sociedad y la ausencia total de mecanismos efectivos de atención y respuesta. 15. A la fecha de presentación de la presente queja, el ADMINISTRADOR no ha efectuado el pago del canon de arrendamiento correspondiente, incurriendo en un incumplimiento directo de las obligaciones contractuales y manteniéndose en estado de mora. A la fecha ya se ha causado un mes completo de incumplimiento, y, de no efectuarse el pago antes del día viernes 26 de abril de 2025, se completará el incumplimiento de dos (2) meses consecutivos de canon de arrendamiento, lo que agrava la situación de perjuicio económico y contractual en contra de la PROPIETARIA. 16. Cabe resaltar que la PROPIETARIA tiene conocimiento de que el inmueble continúa ocupado por los arrendatarios en virtud de un contrato de arrendamiento vigente, y que estos han demostrado ser puntuales y cumplidos en el pago del canon correspondiente. Lo anterior permite inferir que la mora en la consignación de los cánones no obedece a incumplimiento por parte de los inquilinos, sino a una gestión inadecuada, negligente o posiblemente fraudulenta por parte del ADMINISTRADOR, en contravía de sus deberes contractuales y legales. 17. En razón de las dudas surgidas a partir del anuncio del proceso de liquidación de la sociedad ARRIENDOS ANTIOQUIA S.A.S. y de las presunciones derivadas sobre la existencia de una nueva agencia inmobiliaria, se procedió a consultar el Registro Único Empresarial y Social (RUES) respecto del nombre "LUXOR LIVING", el cual aparecía como titular de la cuenta bancaria desde la cual se efectuó la consignación referenciada en el numeral 11. Dicha consulta arrojó resultado positivo, evidenciando que LUXOR



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

la Cámara de Comercio.18. Del mismo certificado se advierte que los representantes legales de dicha sociedad son la señora ANA OMAIRA SUÁREZ RESTREPO, identificada con Cédula de Ciudadanía N.º 21.394.822, como representante legal principal, y el señor JEAN PIERRE BERNIER DE LA HOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 1.002.236.460, como representante legal suplente. Resulta particularmente llamativo que este último comparte el apellido "De La Hoz" con el representante legal de ARRIENDOS ANTIOQUIA S.A.S., señor GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ, lo que genera sospechas razonables de vínculos societarios o familiares entre ambas personas jurídicas. 19. Así mismo, el objeto social de LUXOR LIVING S.A.S. corresponde a actividades económicas clasificadas en la clase 6810 (actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados) y clase 6820 (actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata), lo cual confirma la naturaleza inmobiliaria de su operación. 20. Con base en los anteriores indicios y en aplicación de la sana crítica, se considera que existen elementos suficientes para presumir que, en el marco del proceso de liquidación de ARRIENDOS ANTIOQUIA S.A.S., se habría producido una cesión irregular o encubierta de los contratos de administración a favor de LUXOR LIVING S.A.S., sin que mediara notificación, consentimiento o siquiera conocimiento por parte de la PROPIETARIA, vulnerando sus derechos contractuales y el principio de transparencia que rige este tipo de relaciones jurídicas. 21. Por último, es importante resaltar que la PROPIETARIA depende económicamente y en su totalidad del ingreso derivado del arrendamiento del inmueble referenciado a lo largo del presente escrito, siendo esta su única fuente de sustento. El incumplimiento sistemático por parte de las INMOBILIARIAS en la consignación oportuna de los cánones de arrendamiento ha generado una afectación directa a su mínimo vital, pues actualmente no cuenta con recursos suficientes para cubrir necesidades básicas como el acceso a alimentos, servicios públicos y demás obligaciones personales. Esta situación no solo le causa perjuicios económicos, sino que también vulnera de manera grave sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad personal y al libre desarrollo de su personalidad, al someterla a un estado de angustia e incertidumbre incompatible con los principios constitucionales que deben regir toda relación contractual y toda actuación entre particulares."

Aunado a lo anterior, y dentro del proceso de verificación que se surte en las averiguaciones preliminares, se vislumbra un incumplimiento a lo reglado en el artículo 34 numeral 1 de ley 820 de 2003, el cual no ostenta MAVU según la base de datos administrada por la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia.

### CONSIDERACIONES LEGALES:

Procederemos estudiando en un primer momento el marco jurídico que regula el caso concreto, comenzando por la Ley 820 en sus artículos 32 y siguientes para luego dar aplicación a la norma al caso que nos concentra, con especial atención



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 820 de 2003, se establece la facultad de inspección, control y vigilancia en materia de arrendamiento en las alcaldías municipales del país y el artículo 33 consagra que funciones deben cumplir las entidades territoriales, siguiendo el procedimiento señalado en el Código Contencioso Administrativo, para aquellos quienes no cumpla los requisitos previstos en la norma antes citada.

Debido a lo anterior, el señor Alcalde del Distrito Especial de Medellín, mediante el Decreto 532 del 2016 delega estas funciones en el Subsecretario de Gobierno Local y Convivencia aunado a lo establecido en el Decreto 888 de 2022 en el párrafo 2 del artículo 10 en cuanto a la inspección, control y vigilancia.

En este orden de ideas, se tiene, entonces, que frente al incumplimiento de la norma contenida en la Ley 820 de 2003, por parte de las agencias o inmobiliarias, y en atención a la necesidad de adelantar los procedimientos tendientes a determinar la existencia o no de violación a dicha norma de conformidad con los preceptos contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), acápite dentro del cual se encuentra el Capítulo III que establece el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, que indica lo siguiente:

- “Art. 47.- **Procedimiento administrativo sancionatorio.** Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuera del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que se originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Los investigados podrán dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

(...). **Art. 48.- Periodo Probatorio** Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor de treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior, el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.

Vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos.

**Art. 49.- Contenido de la decisión.** El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos.

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener:

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final del archivo o sanción y la correspondiente fundamentación."

La Ley 820 del 2003 en sus artículos 32 y siguientes regula eventos hipotéticos en los que se pueden llegar a ver inmersas las agencias de arrendamientos en desarrollo de sus actividad económica, tal como la que nos concentra la queja interpuesta por la señora **CAMILA SALAZAR FRANCO**, donde pone en conocimiento el incumplimiento que se está presentando por parte de la sociedad denominada "**ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS**", cuyos Representantes Legales registrados son **GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO**, respectivamente, entidad que NO posee MATRICULA DE ARRENDADOR DE VIVIENDA URBANA, M.A.V.U y que tiene sede registrada en la **carrera 32 numero 1 B sur 51 of 630 y calle 30 número 8B 25** en Medellín-Antioquia, según base de datos de la Cámara de Comercio RUES, en razón del presunto incumplimiento a los lineamientos del Artículo 34, Numeral 1, que cita:

**La ley 820 de 2003, estipula: Inspección, control y vigilancia en materia de arrendamientos.**

**Artículo 34. Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones a que**



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

***1. Cuando cualquier persona a las que se refiere el artículo 28 no cumpla con la obligación de obtener la matrícula dentro del término señalado en la presente ley.***

Teniendo en cuenta queja del 4 de abril de 2024, en la cual dan a conocer posibles irregularidades por posible violación a la Ley 820 de 2003, por parte de la sociedad denominada **“ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS”**, cuyos Representantes Legales registrados son **GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO**, respectivamente, entidad que NO posee MATRICULA DE ARRENDADOR DE VIVIENDA URBANA, M.A.V.U y que tiene sede registrada en la **carrera 32 numero 1 B sur 51 of 630 y calle 30 número 8B 25** en Medellín-Antioquia y teniendo en cuenta lo señalado en queja presentada por la señora **CAMILA SALAZAR FRANCO**, en lo que tiene que ver con el incumplimiento a lo pactado en la Ley 820 de 2003 por no tener matrícula de arrendador.

En mérito de lo expuesto la Inspección de Policía de conocimiento en Asuntos de Protección al Consumidor de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en ejercicio de su función de Policía y, atendiendo la delegación conferida mediante el Decreto Municipal 532 del 2016 y 888 de 2022.

### RESUELVE

**PRIMERO: ABRIR** investigación administrativa sancionatoria a las sociedades denominadas **“ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS”**, con identificación número 901497927-3 y 901899412-8, cuyos representantes legales son **GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO**, cédulas de ciudadanía 1.040.755.413 y 21.394.822 respectivamente, teniendo en cuenta la queja con la cual dan a conocer posibles irregularidades por violación a la Ley 820 de 2003, en desarrollo del proceso con radicado **2-11972-25** conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**SEGUNDO: FORMULAR** pliegos de cargos a las sociedades denominadas **“ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS”**, con identificación número 901497927-3 y 901899412-8, cuyos representantes legales son **GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO**, cédulas de ciudadanía 1.040.755.413 y 21.394.822 respectivamente, teniendo en cuenta queja con la cual dan a conocer posibles irregularidades por violación



## **Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

**UNICO CARGO:** por no tener matrícula de arrendador que los habilita el desarrollo de su actividad inmobiliaria en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, incumpliendo lo definido en el:

***Artículo 34. Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la autoridad competente podrá imponer multas hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, mediante resolución motivada, por las siguientes razones:***

***1. Cuando cualquier persona a las que se refiere el artículo 28 no cumpla con la obligación de obtener la matrícula dentro del término señalado en la presente ley.***

**TERCERO: COMUNICAR a GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO**, cédula de ciudadanía 1.040.755.413 y 21.394.822, con cédulas de ciudadanía 32.510.284, en calidad de representantes legales de las sociedades denominadas **“ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS”**, con identificación número 901497927-3 y 901899412-8, respectivamente, que cuenta con un término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, quien debe ser abogado inscrito, los respectivos descargos ante este Despacho y aporte o solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011).

Parágrafo Primero- Vencido el término para la presentación de descargos y pruebas, se continuará con el trámite del proceso o expediente, decretando y practicando las pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo Segundo- Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código General del Proceso, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CUARTO: NOTIFICAR** personalmente el presente acto administrativo a **GENE**





## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

3 y 901899412-8 respectivamente, en los términos de los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o en su defecto por Aviso de conformidad con lo previsto en el artículo 69 ibídem.

**QUINTO: INFORMAR** que la documentación en la que se fundan los cargos obra como piezas probatorias en el expediente, el cual estará a disposición en la secretaria de este despacho para su conocimiento.

**SEXTO:** Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**VICTOR HUGO GALLEGU RODRIGUEZ**

Inspector de Policía Urbana de Conocimiento en Asuntos de Protección al  
Consumidor



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

## **DILIGENCIA DE NOTIFICACION**

En la fecha que aparece al pie de la firma, notifico en forma personal a las sociedades denominadas **“ARRIENDOS ANTIOQUIA SAS Y LUXOR LIVING SAS”**, con identificación número 901497927-3 y 901899412-8, cuyos representantes legales son **GENE FERNANDO VISBAL DE LA HOZ Y ANA OMAIRA SUAREZ RESTREPO**, cédulas de ciudadanía 1.040.755.413 y 21.394.822, ubicada en la **carrera 32 numero 1 B sur 51 of 630 y calle 30 número 8B 25** en Medellín-Antioquia, el contenido de la Resolución No. 295 del 9 de junio del 2025, a quien además se le hace entrega de copia íntegra, autentica y gratuita de la misma. Igualmente, se le informa que en contra de este acto administrativo no procede ningún recurso.

## **NOTIFICADO**

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Cedula de ciudadanía \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha de notificación: Día ( ) Mes ( ) Año ( )

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**VICTOR HUGO GALLEGU RODRIGUEZ**